

**CONVENIO DE UNIDROIT  
SOBRE LOS BIENES CULTURALES ROBADOS  
O EXPORTADOS ILÍCITAMENTE**

Roma, 24 de junio de 1995

**LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE CONVENIO**

*Reunidos* en Roma por invitación del Gobierno de la República Italiana del 7 al 24 de junio de 1995 para celebrar una Conferencia diplomática con miras a la aprobación del proyecto de CONVENIO DE UNIDROIT sobre la restitución internacional de los bienes culturales robados o exportados ilícitamente;

*Convencidos* de la importancia fundamental de la protección del patrimonio cultural y de los intercambios culturales para promover la comprensión entre los pueblos y de la difusión de la cultura para el bienestar de la humanidad y el progreso de la civilización;

*Profundamente preocupados* por el tráfico ilícito de los bienes culturales y por los daños irreparables que a menudo produce tanto a los propios bienes como al patrimonio cultural de las comunidades nacionales -tribales, autóctonas u otras- y al patrimonio común de todos los pueblos, y deplorando en particular el pillaje de lugares arqueológicos y la consiguiente irremplazable pérdida de información arqueológica, histórica y científica;

Comentarios  
Guillermo López  
Reche  
*Jefe del Servicio del  
Plan General de Bienes  
Culturales*

La preocupación por el tráfico ilícito de los bienes culturales está muy extendida internacionalmente. Así, tras la Convención de la UNESCO sobre las “medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales”, adoptada en París en 1970, se han sucedido las convenciones y recomendaciones de ámbito regional sobre esta materia.

En este sentido, pueden citarse la Convención de la Organización de Estados Americanos sobre “defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas”, aprobada en Santiago de Chile en 1976; las Recomendaciones adoptadas en el Seminario Regional (Asia y Región del Pacífico) de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Mueble, celebrado en Brisbane en 1986; las Recomendaciones adoptadas en el Taller Regional de la UNESCO reunido en Jomtiem (Tailandia) en 1992, respecto a la Convención de París de 1970; el denominado “Estatuto de Cormayeur”, aprobado también en 1992; las Recomendaciones adoptadas por el Seminario Regional de la UNESCO para los países de Asia Central y del Este de Europa sobre

tráfico ilícito del Patrimonio Cultural, celebrado en Keszthely (Hungría) en 1993; el denominado “Llamado de Bamako” (Malí) de 1994, que refleja las estrategias en esta materia de los países del Sur y el Este de África; la Convención Centroamericana para la restitución y el retorno de objetos arqueológicos, históricos y artísticos, firmada en la Ciudad de Guatemala en 1995 y la conocida como “Declaración de Grand Anse”, adoptada en 1997 por los países del área del Caribe.

La gravedad de la pérdida de información que lleva aparejada el tráfico ilícito de bienes culturales queda también reflejada en el Preámbulo de Convención de la UNESCO de 1970, citada en la nota 1, en donde se dice que éstos “sólo adquieren su verdadero valor cuando se conocen con la mayor precisión su origen, su historia y su medio”.

*Decididos* a contribuir con eficacia a la lucha contra el tráfico ilícito de los bienes culturales, estableciendo un cuerpo mínimo de normas jurídicas comunes con miras a la restitución y a la devolución de los bienes culturales entre los Estados Contratantes, a fin de favorecer la preservación y protección del patrimonio cultural en interés de todos;

*Destacando* que el presente Convenio tiene por objetivo facilitar la restitución y la devolución de los bienes culturales, y que el establecimiento en ciertos Estados de mecanismos, como la indemnización, necesarios para garantizar la restitución o la devolución, no implica que esas medidas deberían ser adoptadas en otros Estados;

*Afirmando* que la aprobación de las disposiciones del presente Convenio para el futuro no constituye en modo alguno una aprobación o legitimación de cualquier tráfico ilícito que se haya producido antes de su entrada en vigor;

*Conscientes* de que el presente Convenio no resolverá por sí solo los problemas que plantea el tráfico ilícito, pero iniciará un proceso tendiente a reforzar la cooperación cultural internacional y a reservar su justo lugar al comercio lícito y a los acuerdos entre Estados en los intercambios culturales;

*Reconociendo* que la aplicación del presente Convenio debería ir acompañada de otras medidas eficaces en favor de la protección de los bienes culturales, como la elaboración y utilización de registros, la protección material de los lugares arqueológicos y la cooperación técnica;

*Rindiendo* homenaje a la actividad llevada a cabo por diversos organismos para proteger los bienes culturales, en particular la CONVENCIÓN

DE LA UNESCO DE 1970 relativa al tráfico ilícito y a la elaboración de códigos de conducta en el sector privado,

HAN APROBADO las disposiciones siguientes:

## **CAPÍTULO I. CAMPO DE APLICACIÓN Y DEFINICIÓN**

### **Artículo 1**

El presente Convenio se aplicará a las demandas de carácter internacional:

- a.** De restitución de bienes culturales robados;
- b.** De devolución de bienes culturales desplazados del territorio de un Estado Contratante en infracción de su derecho que regula la exportación del bienes culturales con miras a la protección de su patrimonio cultural (en adelante denominados “bienes culturales exportados ilícitamente”).

El Convenio distingue los supuestos de robo y de exportación ilícita de bienes culturales, denominando a las acciones correspondientes “de restitución” en el primer caso y “de devolución” en el segundo. Sin embargo, la regulación de muchos aspectos (plazos de prescripción, derecho a indemnización, etc.) se reproduce en cada uno de los supuestos, por lo que, tal vez, hubiera sido preferible una sistemática menos repetitiva.

La exportación es una competencia estatal regulada en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (arts. 5, 30 y ss.). El art. 5 de dicha Ley establece la necesidad de autorización expresa y previa de la Administración del Estado y prohíbe la exportación de los bienes declarados de interés cultural, así como la de aquellos que se declaren expresamente inexportables, como medida cautelar hasta la incoación del expediente para su inclusión en alguna categoría de protección especial. Los preceptos de la Ley han sido desarrollados por el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado, a su vez, por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero.

### **Artículo 2**

A los efectos del presente Convenio, por “bienes culturales” se entienden los bienes que -por razones religiosas o profanas- revisten importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia, y que pertenecen a alguna de las categorías enumeradas en el anexo al presente Convenio.

Este concepto de bienes culturales, así como las categorías enumeradas en el Anexo del Convenio, son reflejo literal del concepto recogido en el Artículo 1 de la Convención de la UNESCO adoptada en París en 1970 y citada en la nota 1. Se trata de un concepto amplio de bienes culturales, asimilable al concepto de "Patrimonio Histórico Español", recogido en el art. 1.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio o al de "Patrimonio Histórico Andaluz", al que alude el art. 2 de la Ley de Andalucía 1/1991, de 3 de julio.

## **CAPÍTULO II. RESTITUCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES ROBADOS**

### **Artículo 3**

- 1.** El poseedor de un bien cultural robado deberá restituirlo.
- 2.** A los efectos del presente Convenio, se considera robado un bien cultural obtenido de una excavación ilícita o de una excavación lícita pero conservado ilícitamente, si ello es compatible con el derecho del Estado donde se ha efectuado la excavación.
- 3.** Toda demanda de restitución deberá presentarse en un plazo de tres años a partir del momento en que el demandante haya conocido el lugar donde se encontraba el bien cultural y la identidad de su poseedor y, en cualquier caso, dentro de un plazo de cincuenta años desde el momento en que se produjo el robo.

Estos plazos son más reducidos en la regulación de la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. El art. 6 de dicha Ley establece el plazo de un año desde la localización del bien para que prescriba la acción de restitución y, en todo caso (aunque con alguna excepción), el plazo de treinta años, a partir de la fecha en que el bien cultural haya salido de forma ilegal del territorio del Estado miembro requirente.

- 4.** Sin embargo, una demanda de restitución de un bien cultural que forme parte integrante de un monumento o de un lugar arqueológico identificado, o que pertenezca a una colección pública, no estará sometida a ningún plazo de prescripción distinto del plazo de tres años a partir del momento en que el demandante haya conocido el lugar donde se encontraba el bien cultural y la identidad del poseedor.

Se trata de excepciones justificadas en el mantenimiento de la integridad de los monumentos, lugares arqueológicos o colecciones públicas, considerándose, por tanto, el valor contextual como merecedor de una especial protección.

**5.** No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, todo Estado Contratante podrá declarar que una demanda prescribe en un plazo de 75 años o en un plazo más largo previsto en su derecho. Una demanda, presentada en otro Estado Contratante, de restitución de un bien cultural desplazado de un monumento, de un lugar arqueológico o de una colección pública situada en un Estado Contratante que haya hecho esa declaración, prescribirá en el mismo plazo.

**6.** La declaración a que se hace referencia en el párrafo precedente, se hará en el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión.

**7.** A los efectos del presente Convenio, por, “colección pública” se entiende todo conjunto de bienes culturales inventariados o identificados de otro modo que pertenezca a:

- a. Un Estado Contratante;
- b. Una colectividad regional o local de un Estado Contratante;
- c. Una institución religiosa situada en un Estado Contratante;
- d. Una institución establecida con fines esencialmente culturales, pedagógicos o científicos en un Estado Contratante y reconocida en ese Estado como de interés público.

La Ley 36/1994, citada en la nota 6, señala en su art. 1.2 que “se considerarán colecciones públicas las que figuren en los inventarios de museos, archivos y fondos de conservación de bibliotecas, propiedad del Estado miembro, de sus entidades territoriales, o de organismos que tengan carácter público conforme a sus normas fundacionales”.

**8.** Además, la demanda de restitución de un bien cultural sagrado, o que revista una importancia colectiva perteneciente a una comunidad autóctona o tribal, y utilizado por ella en un Estado Contratante para uso tradicional o ritual de esa comunidad, estará sometida al plazo prescripción aplicable a las colecciones públicas.

#### **Artículo 4**

**1.** El poseedor de un bien cultural robado que deba restituirlo, tendrá derecho al pago, en el momento de su restitución, de una indemnización equitativa, a condición de que no supiese o hubiese debido razonablemente saber que el bien era robado y de que pudiese demostrar que había actuado con la diligencia debida en el momento de su adquisición.

El derecho a una indemnización que se otorga al poseedor de buena fe es una medida destinada a garantizarle un equilibrio patrimonial que, normalmente, facilitará la resolución de estos procedimientos.

La Ley 36/1994, citada en la nota 6, reconoce también este derecho a indemnización, fijada en este caso por el órgano judicial, mientras que en la Convención Centroamericana para la Restitución y el Retorno de Objetos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, suscrita en la Ciudad de Guatemala en 1995, se opta por excluir este derecho del poseedor de buena fe, estableciendo en su art. 7 que el país requirente no estará obligado a pagar indemnización alguna a la persona que adquirió el bien "bajo cualquier título".

**2.** Sin perjuicio del derecho del poseedor a la indemnización prevista en el párrafo precedente, se hará todo lo razonablemente posible para que la persona que ha transferido el bien cultural al poseedor, o cualquier otro cedente anterior, pague la indemnización cuando ello sea conforme al derecho del Estado en el que se presentó la demanda.

**3.** El pago de la indemnización al poseedor por el demandante, cuando ello se exija, no menoscabará el derecho del demandante a reclamar su reembolso a otra persona.

**4.** Para determinar si el poseedor actuó con la diligencia debida, se tendrán en cuenta todas las circunstancias de la adquisición, en particular la calidad de las partes, el precio pagado, la consulta por el poseedor de cualquier registro -relativo a los bienes culturales robados- razonablemente accesible y cualquier otra información y documentación pertinente que hubiese podido razonablemente obtener, así como la consulta de organismos a los que podía tener acceso o cualquier otra gestión que una persona razonable hubiese realizado en las mismas circunstancias.

Se recogen aquí una serie de criterios para valorar la diligencia del poseedor del bien, cuya valoración por la autoridad judicial o administrativa será determinante para la existencia, en su caso, del derecho a indemnización.

**5.** El poseedor no gozará de condiciones más favorables que las de la persona que adquirió el bien cultural -por herencia o de cualquier otra manera- a título gratuito.

## **CAPÍTULO III. DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EXPORTADOS ILÍCITAMENTE**

### **Artículo 5**

**1.** Un Estado Contratante podrá solicitar al tribunal o cualquier otra autoridad competente de otro Estado Contratante que ordene la devolución de un bien cultural exportado ilícitamente del territorio del Estado requirente.

En los supuestos de exportación ilícita la legitimación activa para instar la devolución del bien corresponde, únicamente, a los Estados Contratantes.

**2.** Un bien cultural, exportado temporalmente del territorio del Estado requirente -en particular con fines de exposición, investigación o restauración- en virtud de una autorización expedida de acuerdo con su derecho que regula la exportación de bienes culturales con miras a la protección de su patrimonio cultural y que no haya sido devuelto de conformidad con las condiciones de esa autorización, se considerará que ha sido exportado ilícitamente.

La exportación temporal se regula en la legislación española en el art. 31 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y en los arts. 52 a 57 del Real Decreto 11/1986, de 10 de enero, por el que desarrolla parcialmente la citada Ley.

**3.** El tribunal o cualquier otra autoridad competente del Estado requerido ordenará la devolución del bien cultural cuando el Estado requirente demuestre que la exportación del bien produce un daño significativo con relación a alguno de los intereses, siguientes:

- a.** La conservación material del bien o de su contexto;
- b.** La integridad de un bien complejo;
- c.** La conservación de la información, en particular de carácter científico o histórico, relativa al bien;
- d.** La utilización tradicional o ritual del bien por una comunidad autóctona o tribal, o que el bien reviste para él una importancia cultural significativa;

Se exige en este apartado la acreditación de que la exportación ilícita produce un daño significativo, de acuerdo con unos determinados parámetros que se relacionan. Se hace, con ello, más compleja la labor del Estado requirente, al que no bastará demostrar el carácter ilícito de la exportación.

**4.** Toda demanda presentada en virtud del párrafo 1 del presente artículo deberá ir acompañada de cualquier información -de hecho o de derecho- que permita al tribunal o a la autoridad competente del Estado requerido determinar si se cumplen las condiciones de los párrafos 1 a 3.

**5.** Toda demanda de devolución deberá presentarse dentro de un plazo de tres años a partir del momento en que el Estado requirente haya conocido el lugar donde se encontraba el bien cultural y la identidad de su poseedor y, en cualquier caso, en un plazo de cincuenta años a partir de la fecha de la exportación o de la fecha en la que el bien hubiese debido devolverse en virtud de la autorización a que se hace referencia en el párrafo 2 del presente artículo.

Estas previsiones sobre plazos de prescripción suponen un planteamiento en abierta contradicción con lo preceptuado por el art. 29 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, que declara inalienables e imprescriptibles a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español exportados sin autorización.

## **Artículo 6**

**1.** El poseedor de un bien cultural que haya adquirido ese bien después de que éste ha sido exportado ilícitamente tendrá derecho, en el momento de su devolución, al pago por el Estado requirente de una indemnización equitativa, a condición de que el poseedor no supiese o hubiese debido razonablemente saber -en el momento de la adquisición- que el bien se había exportado ilícitamente.

**2.** Para determinar si el poseedor sabía o hubiese debido razonablemente saber que el bien cultural se había exportado ilícitamente se tendrán en cuenta las circunstancias de la adquisición, en particular la falta del certificado de exportación requerido en virtud del derecho del Estado requirente.

**3.** En lugar de la indemnización, y de acuerdo con el Estado requirente, el poseedor que deba devolver el bien cultural al territorio de ese Estado podrá optar por:

- a.** Seguir siendo el propietario del bien; o
- b.** Transferir su propiedad -a título oneroso o gratuito- a la persona que elija, siempre que ésta resida en el Estado requirente y presente las garantías necesarias.

**4.** Los gastos derivados de la devolución del bien cultural de confor-



Se prima aquí el regreso del bien al territorio del Estado requirente, con independencia de quien ostente su titularidad.

midad con el presente artículo correrán a cargo del Estado requirente, sin perjuicio de su derecho a hacerse reembolsar los gastos por cualquier otra persona.

**5.** El poseedor no gozará de condiciones más favorables que las de la persona de la que adquirió el bien cultural -por herencia o de cualquier otro modo- a título gratuito.

### **Artículo 7**

**1.** Las disposiciones del presente Capítulo no se aplicarán cuando:

- a.** La exportación del bien cultural **sea más ilícita** en el momento en que se solicite la devolución, o;
- b.** El bien se haya exportado en vida de la persona que lo creó o durante un período de cincuenta años después del fallecimiento de esa persona.

**2.** No obstante lo dispuesto en el apartado b) del párrafo precedente las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán cuando el bien cultural haya sido creado por un miembro o miembros de una comunidad autóctona o tribal para uso tradicional o ritual de esa comunidad y el bien deba devolverse a esa comunidad.

## **CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES GENERALES**

### **Artículo 8**

**1.** Se podrá presentar una demanda fundada en los Capítulos II o III ante los tribunales o ante cualesquiera otras autoridades competentes del Estado Contratante en el que se encuentre el bien cultural, así como ante los tribunales u otras autoridades competentes que puedan conocer del litigio en virtud de las normas en vigor en los Estados Contratantes.

**2.** Las partes podrán convenir someter el litigio a un tribunal u otra autoridad Competente, o a arbitraje.

**3.** Las medidas provisionales o preventivas previstas por la ley del

Los bienes cuyos autores vivan o hayan fallecido hace menos de cincuenta años quedan excluidos del Convenio. Sin embargo, sí quedarán incluidos en su ámbito de aplicación cuando se

destinen a usos tradicionales o rituales de una comunidad, demostrándose así una especial sensibilidad con el valor identitario de determinados bienes.

Estado Contratante en que se encuentre el bien, podrán aplicarse incluso si la demanda de restitución o de devolución del bien se presenta ante los tribunales o ante cualesquiera otras autoridades competentes de otro Estado Contratante.

#### **Artículo 9**

Persiguiendo el mayor aseguramiento del bien que, en su caso, haya de restituirse o devolverse, se admite la aplicación de las medidas provisionales o preventivas propias del Estado Contratante donde se encuentre el bien, aunque la demanda correspondiente se haya presentado ante otro Estado Contratante.

**1.** El presente Convenio no impide a un Estado Contratante aplicar otras normas más favorables -para la restitución o devolución de los bienes culturales robados o exportados ilícitamente- distintas de las que se estipulan en el presente Convenio.

**2.** El presente artículo no deberá interpretarse en el sentido de que crea una obligación de reconocer o de dar fuerza ejecutiva a la decisión de un tribunal o de cualquier otra autoridad competente de otro Estado Contratante que se aparte de lo dispuesto en el presente Convenio.

#### **Artículo 10**

**1.** Las disposiciones del Capítulo II se aplicarán a un bien cultural que haya sido robado después de la entrada en vigor del presente Convenio con respecto al Estado en el que se presenta la demanda, a condición de que:

- a.** El bien haya sido robado en el territorio de un Estado Contratante después de la entrada en vigor del presente Convenio con respecto a ese Estado; o
- b.** El bien se encuentre en un Estado Contratante después de la entrada en vigor del presente Convenio con respecto a ese Estado.

**2.** Las disposiciones del Capítulo III se aplicarán sólo a un bien cultural exportado ilícitamente después de la entrada en vigor del Convenio con respecto al Estado requirente así como con respecto al Estado en el que se presenta la demanda.

**3.** El presente Convenio no legitima en modo alguno una actividad ilícita

de cualquier tipo que se llevara a cabo antes de la entrada en vigor del presente Convenio o que quedara excluida de la aplicación del Convenio en virtud de los párrafos 1) ó 2) del presente artículo, ni limita el derecho de un Estado o de otra persona a presentar, fuera del marco del presente Convenio, una demanda de restitución o de devolución de un bien robado o exportado ilícitamente antes de la entrada en vigor del presente Convenio.

## **CAPÍTULO V. DISPOSICIONES FINALES**

La imposibilidad de aplicación retroactiva del Convenio no impide que puedan presentarse demandas de restitución o devolución, motivadas por hechos anteriores a su entrada en vigor, amparadas en otros Convenios o normas.

### **Artículo 11**

**1.** El presente Convenio quedará abierto a la firma en la sesión de clausura de la Conferencia diplomática con miras a la aprobación del proyecto de CONVENIO DE UNIDROIT sobre la restitución internacional de los bienes culturales robados o exportados ilícitamente y quedará abierta a la firma de todos los Estados en Roma hasta el 30 de junio de 1996.

**2.** El presente Convenio estará sometido a la ratificación, aceptación, o aprobación de los Estados que lo han firmado.

**3.** El presente Convenio quedará abierto a la adhesión de todos los Estados que no son signatarios a partir de la fecha en que quede abierto a la firma.

**4.** La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán objeto a estos efectos del depósito de un instrumento en buena y debida forma ante el depositario.

### **Artículo 12**

**1.** El presente Convenio entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente a la fecha del depósito del quinto depósito del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

**2.** Para todo Estado que ratifique, acepte o apruebe el presente Convenio o se adhiera a él después del depósito del quinto instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en

vigor con respecto a ese Estado el primer día del sexto mes siguiente a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

### **Artículo 13**

**1.** El presente Convenio no deroga los instrumentos internacionales que vinculan jurídicamente a un Estado Contratante y que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio, a menos que los Estados vinculados por esos instrumentos formulen una declaración en contrario.

**2.** Todo Estado Contratante podrá concertar con uno o con varios Esta-

Se refleja aquí un principio de compatibilidad del Convenio con otros instrumentos internacionales que persigan fines similares.

dos Contratantes acuerdos para facilitar la aplicación del presente Convenio en sus relaciones recíprocas. Los Estados que hayan concertado acuerdos de ese tipo transmitirán copia de ellos al depositario.

**3.** En sus relaciones mutuas, los Estados Contratantes miembros de

Se recoge la posibilidad de suscribir acuerdos de desarrollo entre dos o más Estados parte del Convenio, lo que, salvando las distancias, puede compararse con el desarrollo reglamentario de una Ley. Estos acuerdos deberán trasladarse al Estado depositario.

organizaciones de integración económica o de entidades regionales, podrán declarar que aplicarán las normas internas de esas organizaciones o entidades y que no aplicarán, por tanto, en esas relaciones las disposiciones del presente Convenio cuyo ámbito de aplicación coincida con el de esas normas.

Se admite que los Estados miembros de organizaciones de integración económica o de entidades regionales puedan aplicar las normas internas de éstas, en lugar de las disposiciones del Convenio cuyo ámbito de aplicación sea coincidente.

Esta situación podría plantearse con respecto a la Unión Europea, que cuenta con el Reglamento (CEE) 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la exportación de bienes culturales; el Reglamento (CEE) 752/93 de la Comisión, de 30 de marzo de 1993, relativo a las disposiciones de aplicación del Reglamento anterior y la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territo-

rio de un Estado miembro de la Unión Europea, incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 36/1994, de 23 de diciembre.

#### **Artículo 14**

- 1.** Todo Estado Contratante que abarque dos o varias unidades territoriales -posean o no estos sistemas jurídicos diferentes aplicables a las materias reguladas por el presente Convenio- podrá en el momento de la firma o del depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que el Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o únicamente a una o varias de ellas y podrá en todo momento sustituir esa declaración por otra nueva.
- 2.** Esas declaraciones se notificarán al depositario y designarán expre-

Conviene recordar que, en el caso español, las competencias en materia de exportación y exportación son competencias exclusivas del Estado, según señala el art. 149.1.28º de la Constitución.

samente las unidades territoriales a las que se aplica el Convenio.

- 3.** Si en virtud de una declaración formulada de conformidad con este artículo, el presente Convenio se aplica a una o varias de las unidades territoriales de un Estado Contratante, pero no a todas, la mención:

- a.** Del territorio de un Estado Contratante en el Artículo 1 se refiere al territorio de una unidad territorial de ese Estado;
- b.** Del tribunal u otra autoridad competente del Estado Contratante o del Estado requerido se refiere al tribunal u otra autoridad competente de una unidad territorial de ese Estado;
- c.** Del Estado Contratante en el que se encuentre el bien cultural a que se alude en el párrafo 1 del Artículo 8 se refiere a la unidad territorial del Estado en el que se encuentre el bien;
- d.** De la ley del Estado Contratante en el que se encuentre el bien a que se alude en el párrafo del Artículo 8 se refiere a la ley de la unidad territorial de ese Estado donde se encuentre el bien;
- e.** De un Estado Contratante a que se alude en el Artículo 9 se refiere a una unidad territorial de ese Estado.

- 4.** Si un Estado Contratante no hace ninguna declaración en virtud del párrafo 1 de este artículo, el presente Convenio se aplicará al conjunto del territorio de ese Estado.

#### **Artículo 15**

**1.** Las declaraciones hechas en virtud del presente Convenio en el momento de la firma están sujetas a confirmación cuando se proceda a su ratificación, aceptación o aprobación.

**2.** Las declaraciones, y la confirmación de las declaraciones, se harán por escrito y se notificarán oficialmente al depositario.

**3.** Las declaraciones surtirán efecto en la fecha de entrada en vigor del presente Convenio con respecto al Estado declarante. No obstante, las declaraciones de las que haya recibido notificación el depositario oficialmente después de esa fecha surtirán efecto el primer día del sexto mes siguiente a la fecha de su depósito ante el depositario.

**4.** Todo Estado que haga una declaración en virtud del presente Convenio podrá, en cualquier momento, retirarla mediante notificación oficial dirigida por escrito al depositario. Esa retirada surtirá efecto el primer día del sexto mes siguiente a la fecha del depósito de la notificación.

## **Artículo 16**

**1.** Todo Estado Contratante deberá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que las demandas de devolución o restitución de bienes culturales presentadas por un Estado en virtud del Artículo 8 podrán someterse según uno o varios de los procedimientos siguientes:

- a.** Directamente ante los tribunales u otras autoridades competentes del Estado declarante;
- b.** Por intermedio de una o varias autoridades designadas por ese Estado para recibir esas demandas y transmitir las a los tribunales u otras autoridades competentes de ese Estado;
- c.** Por vía diplomática o consular.

**2.** Todo Estado Contratante podrá también designar a los tribunales u

Han de estar claramente determinados los procedimientos válidos en cada Estado Contratante, para admitir las demandas de restitución o devolución, con objeto de facilitar la plena aplicación del Convenio desde el momento de su entrada en vigor.

otras autoridades competentes para ordenar la restitución o la devolución de los bienes culturales de conformidad con las disposiciones de

los Capítulos II y III.

**3.** Toda declaración hecha en virtud de los párrafos 1 y 2 del presente artículo podrá ser modificada en cualquier momento por una nueva declaración.

**4.** Las disposiciones de los párrafos 1 a 3 del presente artículo no derogarán las disposiciones de los acuerdos bilaterales y multilaterales de ayuda mutua judicial en las materias civiles y comerciales que puedan existir entre los Estados Contratantes.

### **Artículo 17**

Todo Estado Contratante, en un plazo de seis meses a partir de la fecha del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, remitirá al depositario una información por escrito en uno de los idiomas oficiales del Convenio sobre la legislación que regula la exportación de bienes culturales. Esta información se actualizará, si procede, periódicamente.

### **Artículo 18**

Se establece, a través del Estado depositario, una conexión entre las distintas legislaciones nacionales en materia de exportación, imprescindible para determinar el carácter ilícito de las exportaciones, de acuerdo con las previsiones del art. 5 del propio Convenio.

No se admitirá reserva alguna aparte de las expresamente autorizadas por el presente Convenio.

### **Artículo 19**

**1.** El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados Partes en todo momento a partir de la fecha en la que entre en vigor con respecto a ese Estado mediante el depósito de un instrumento a estos efectos ante el depositario.

**2.** Una denuncia surtirá efecto el primer día del sexto mes siguiente a la fecha del depósito del instrumento de denuncia ante el depositario. Cuando en el instrumento de denuncia se indique un período más largo para que la denuncia surta efecto, ésta surtirá efecto a la expiración del período indicado, después del depósito del instrumento de denuncia ante el depositario.

**3.** Sin perjuicio de esa denuncia, el presente Convenio seguirá siendo

aplicable a toda demanda de restitución o de devolución de un bien cultural presentada antes de la fecha en que la denuncia surta efecto.

## **Artículo 20**

Se evita, de este modo, la posibilidad de una denuncia del Convenio motivada por el deseo de eludir una demanda presentada ante un Estado Contratante.

El Presidente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit) podrá convocar, periódicamente o a petición de cinco Estados Contratantes, un comité especial a fin de que examine el funcionamiento práctico del presente Convenio.

## **Artículo 21**

1. El presente Convenio se depositará ante el Gobierno de la República Italiana.

2. El Gobierno de la República Italiana:

a. Comunicará a todos los Estados signatarios del presente Convenio o que se hayan adherido a él y al Presidente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT):

I. Toda firma nueva o todo depósito de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y la fecha de esa firma o depósito;

II. Toda declaración, efectuada en virtud de las disposiciones del presente Convenio;

III. La retirada de cualquier declaración;

IV. La fecha de entrada en vigor del presente Convenio;

V. Los acuerdos previstos en el Artículo 13;

VI. El depósito de cualquier instrumento de denuncia del presente Convenio, así como la fecha en la que se efectúe ese depósito y la fecha en la que surta efecto la denuncia.

b. Transmitirá copia certificada del presente Convenio a todos los Estados signatarios y a todos los Estados que se adhieran a él, y al Presidente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT);

c. Desempeñará cualquier otra función que incumba habitualmente a los depositarios.

EN FE DE LO CUAL los plenipotenciarios infraescritos, debidamen-



te autorizados, han firmado el presente Convenio.

HECHO en Roma, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cinco, en un solo original, en los idiomas francés e inglés, siendo los dos textos igualmente auténticos.

**ANEXO - CATEGORÍAS DE BIENES CULTURALES**

- a.** Las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, anatomía y los objetos de interés paleontológico.
- b.** Los bienes relacionados con la historia -con inclusión de la historia de las ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia social- así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los acontecimientos de importancia nacional.
- c.** El producto de las excavaciones -tanto autorizadas como clandestinas- o de los descubrimientos arqueológicos.
- d.** Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico.
- e.** Antigüedades que tengan más de cien años, tales como inscripciones, monedas y sellos grabados.
- f.** El material etnológico.
- g.** Los bienes de interés artístico tales como:
  - I.** Cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material (con exclusión de los dibujos industriales y de los artículos, manufacturados decorados a mano);
  - II.** Producciones originales de arte estatuario y de escultura en cualquier material;
  - III.** Grabados, estampas y litografías originales;
  - IV.** Conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier material.
- h.** Manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés especial (histórico, artístico, científico, literario, etc.) sueltos o en colecciones.
- i.** Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones.
- j.** Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos.
- k.** Objetos de mobiliario que tengan más de cien años e instrumentos de música antiguos.